

Santiago, veintisiete octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos RIT T-405-2019, RUC 1940171026-7, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de dos de enero de dos mil veinte, se acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido que doña Macarena Del Rosario Díaz Contreras interpuso en contra del Hospital de Carabineros, y se lo condenó al pago de las indemnizaciones que se indican.

El demandado dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por decisión de diecinueve de mayo de dos mil veinte, lo rechazó.

Respecto de dicho fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte el de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual el recurrente solicita se unifique la jurisprudencia, consiste en determinar si la relación procesal y la traba de la *litis* se han configurado válidamente al haberse deducido una demanda en contra de una entidad -Hospital de Carabineros- que no cuenta con capacidad procesal para ser parte en un juicio, pues no posee personalidad jurídica ni patrimonio propio, toda vez que forma parte de la Administración Centralizada del Estado, razón por la cual debió accionarse en contra del Fisco de Chile.

Reprocha que se haya rechazado la excepción de falta de legitimación pasiva que opuso al dirigirse la acción en contra de un organismo que carece de capacidad jurídica y patrimonio, en contravención a la doctrina contenida en las



sentencias que ofreció para su cotejo, correspondientes a las dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en las causas roles 2.526-2017, 1.440-2018, 2.481-2018 y 704-2019, que afirman la imposibilidad de constituir una relación procesal válida si uno de los litigantes no está revestido de las capacidades de goce y ejercicio requeridas para tener la calidad de parte en un proceso, careciendo incluso de recursos y bienes propios que permitan hacer cumplir una eventual condena patrimonial, como ocurre en cada uno de esos casos en que se dedujo la acción en contra de diversos organismos integrantes de la Administración del Estado, que, de acuerdo a la normativa que los rigen y a los artículos 26 de la Ley N°18.575 y 3 N°1 del DFL N° 1 de Hacienda, de 1993, sólo pueden actuar a través del Fisco de Chile, representado, a su vez, por el Consejo de Defensa del Estado; agregando que no se trata sólo de un problema formal relativo a la comparecencia en juicio, que pueda ser salvado o convalidado mediante la intervención del Consejo de Defensa del Estado, sino a algo previo, referido a si el servicio demandado pueda tener la calidad jurídica de parte.

Tercero: Que la sentencia de base dejó constancia que durante la audiencia preparatoria se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, lo que condujo a emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y a acoger la denuncia formulada en contra del organismo demandado.

En tanto que la sentencia impugnada desestimó el recurso de nulidad que el demandado fundó, en lo pertinente, en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, acusando la infracción de los artículos 1, 2, 3, 18 y 24 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Hacienda, artículos 1 y 26 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículos 21 y 22 del Código Civil, y artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Para arribar a tal decisión se sostuvo que de los antecedentes establecidos por la de mérito, consta que el contrato celebrado entre las partes fue suscrito por la actora, como trabajadora, y por el Hospital de Carabineros, como empleador, quien se obligó a otorgar el trabajo convenido y a pagar sus remuneraciones, por lo que para la trabajadora su empleador fue el demandado, entidad que la contrató, que cuenta con Rut y que, conforme al artículo 4° del Código del Trabajo, se presume de derecho que el representante de dicha institución, quien además le notifica el despido, es el representante del empleador. Agregando que la circunstancia que el Hospital de Carabineros no tenga personalidad jurídica ni



patrimonio propio es un tecnicismo jurídico que no puede empecer a la trabajadora, si su vinculación cotidiana la mantenía con ese organismo, quien, como se dijo, tuvo la capacidad de contratarla y de despedirla, por lo que al dirigir la demanda en su contra, cumplió con el requisito mínimo de accionar en contra del empleador que aparece en su contrato de trabajo, razones suficientes para desechar la excepción impetrada, como lo hizo oportunamente el tribunal a quo; máxime que la demanda fue contestada por la Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, como representante del Fisco de Chile y, en consecuencia, no hubo indefensión, que es lo que en definitiva protege la excepción invocada.

Cuarto: Que, no obstante constatarse la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de la materia de derecho planteada, habida cuenta, en particular, de lo resuelto en los ofrecidos por el recurrente para su cotejo y en el que se impugna, lo cierto es que esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto coincide en la decisión que estimó que la acción puede ser dirigida en contra del organismo que contrató y despidió a la demandante, ejerciendo las facultades de empleador conforme al artículo 4° del Código del Trabajo, sin que obste a ello la circunstancia de carecer de personalidad jurídica y patrimonio propios por formar parte de la Administración del Estado.

Quinto: Que, en efecto, esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con las dictadas en los autos ingresos números 18.201-2019, 24.005-2019, 36.739-2019, 34.020-2019 y 34.022-2019, en las que se sostuvo que la legitimación pasiva es aquella cualidad que debe encontrarse en el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que -conforme a la ley sustancial- está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra, por lo que le corresponderá contradecir la pretensión y sólo en su contra se podrá declarar la existencia de la relación sustancial objeto de la demanda (Maturana Miquel, Cristián, *Disposiciones Comunes a todo Procedimiento*, Universidad de Chile, 2003, pp. 63). Lo anterior, condujo a concluir que constituye un presupuesto de la acción de carácter sustancial, necesario para la existencia de un pronunciamiento judicial relativo al fondo del asunto deducido, de carácter objetivo, puesto que se basa en la posición de una parte respecto del objeto material del acto.



Asimismo, se estimó que tal concepto debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que *“Los servicios públicos estarán a cargo de un Jefe Superior denominado Director, quien será el funcionario de más alta jerarquía dentro del respectivo organismo”*, y con el inciso primero del artículo 4° del Código del Trabajo, que prevé que *“Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica”*.

Sexto: Que, lo anterior, permite colegir que el Hospital de Carabineros, representado por su Director, puede tener el carácter de legitimado pasivo, pues se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesite personalidad jurídica plena o patrimonio propio.

Lo anterior ha sido refrendado por parte de la doctrina, al sostener que *“... dado que los organismos denominado fiscales no pertenecen sino representan al Fisco respecto de bienes específicos, gozan de imputabilidad jurídica directa y capacidad procesal propia. Son ellos y no el Fisco los sujetos que revisten la calidad de partes en juicio, ejercen los derechos y cargas propios de la defensa, y asumen los efectos de sentencia definitiva”* (Arancibia, Jaime, *La Contraloría General de la República como parte en juicio: capacidad, legitimación y representación*, Revista Ius et Praxis, Año 24, N° 1, 2018, p. 593).

Conclusión que es armónica con el artículo 4° del estatuto laboral, en el sentido que la relación procesal resulta válida, pues se trabó entre el titular del ejercicio del derecho –el demandante- y quien, conforme lo dispone la citada norma, ejerce habitualmente funciones de dirección en el ente al que se le atribuye el carácter de empleador; sin perjuicio que quien deba comparecer al litigio en su nombre sea una entidad distinta, que, por disposición de la ley, ejerce la representación judicial, pues la aptitud para ser emplazado es distinta a la comparecencia en juicio, labor que, en definitiva, realiza el Consejo de Defensa del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 24 N° 1 de su Ley Orgánica Constitucional, por lo que no se divisa una relación procesal ineficaz.



Séptimo: Que, en estas condiciones, no yerra la Corte de Apelaciones de Santiago al resolver como lo hizo, lo que conduce a desestimar el recurso en examen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Al escrito folio 144659: a lo principal y otrosí, estése a lo resuelto precedentemente.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 71.967-20.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., ministro suplente señor Mario Gómez M., y los Abogados Integrantes señora María Cristina Gajardo H., y señor Gonzalo Ruz L.. No firma la Ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, veintisiete octubre de dos mil veintiuno.



En Santiago, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

